



El 25 de febrero de 2018, la revista Portafolio publicó un esperanzador titular: “Transporte público para San Andrés sería eléctrico”, en el que se explica que el Departamento Nacional de Planeación generó un documento donde se invita a firmas consultoras a cotizar un sistema de transporte público eléctrico de pasajeros para nuestras islas. Habría que preguntar en que quedó esta iniciativa, así como los tantos estudios y propuestas que vienen y van con cada posesionado presidente, ministro y viceministro que nos visita.

De cualquier forma, aunque no caería mal un empujón del gobierno central, la responsabilidad directa del disfuncional y precario transporte público de las Islas y la movilidad en general, recae en todos aquellos quienes han ejercido el cargo de gobernadores del Departamento y alcaldes de Providencia, en nadie más; o sí, también en diputados y concejales que tienen responsabilidad compartida en el direccionamiento del desarrollo local.

Lo cierto es que hoy el transporte público en ambas Islas no se compadece ni con las necesidades de su población, ni con los avances mundiales, ni con las demandas ambientales y muchísimo menos con los bolsillos de los más humildes, que siempre son los que pagan la ineficiencia del Estado. Es tan desolador el panorama que en pleno 2019, y aunque parezca de no creer:

1) No tenemos una sola cicloruta.

2) La inmensa mayoría de barrios se encuentran sin cobertura del sistema de transporte público existente.

3) El sistema de transporte con mayor cobertura es ilegal, aunque en la práctica con mayor cobertura que todos los demás legales juntos.

Sin embargo, como en toda situación social, a alguien o a algo le beneficia todo este caos y precariedad, y para explorar estos posibles beneficiarios y, además, darle conexión al título de esta columna, invitaría al lector a realizar la siguiente búsqueda en Google: “Transporte público y compra de votos” y verán un cúmulo de artículos que tratan esta conexión que parece fortalecerse entre deficiencia en medios de transporte público y mercantilización de los procesos electorales.

Y es que una de las formas más usadas en Colombia para someter al elector es precisamente el control de la movilidad del “ciudadano de a pie”. “Nosotros le mandamos el transporte” o “regístrese en el comando y allí le pagamos el transporte hasta el puesto de votación” son frases que mueven miles de millones de pesos en cada fecha de elecciones en nuestro País.

En términos reales, en cada fecha electoral en muchas zonas de Colombia, algunas campañas tremendamente adineradas, monopolizan el transporte público formal e informal como vector ideal para la política transaccional que abre las puertas del poder al clientelismo y la corrupción, pues al final siempre se cumple la sentencia que quien paga para llegar llega a robar.

¿Qué se podría hacer aquí, a nivel local?, si se quiere.

1) En el mediano plazo, establecer un sistema de transporte público eficiente, ambientalmente amigable y con cobertura total y establecer mecanismos y destinar presupuestos para la prestación gratuita de este servicio el día de elecciones (podría iniciarse un primer intento en las elecciones de octubre de este año con el sistema de buses actual).

Movilidad y democracia

Escrito por Faber González

Domingo, 03 de Marzo de 2019 06:58 -

2) En el corto plazo, los ciudadanos debemos “dejar la dejadez” y asegurarnos que nuestra cédula esté inscrita lo más cercano a nuestra casa o a nuestro trabajo (si ese día tiene que trabajar), pasemos la voz a nuestros amigos, empleados, compañeros de trabajo o estudio, podemos inscribir nuestras cédulas hasta el próximo 27 de agosto en la Registraduría o puestos de votación.

Se las podemos poner difícil, una vez en la vida.